



00000040

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

02 de diciembre del 2008

Licenciada
Ana Isabel Antillón
Dirección Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho

Señora Directora:

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el **DICTAMEN FAVORABLE**, emitido en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a los diecisiete días del mes de noviembre del año en curso, a las **Iniciativas Nos. 3894, 3919 y 3963** que dispone aprobar **LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO**.

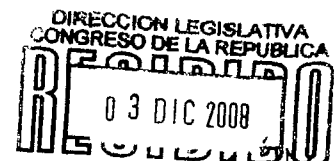
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a la Señora Directora las muestras de mi alta estima.

Oliverio García Rodas
Presidente



COMISION DE LEGISLACION
Y PUNTOS CON.
Congreso de la República

cc. arch.



HORA: FIRMA:



00000041

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

DICTAMEN No.24

INICIATIVAS Nos. 3894, 3919 y 3963

LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO

HONORABLE PLENO:

ANTECEDENTES

Con fechas nueve y treinta de septiembre y doce de noviembre de dos mil ocho, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció las iniciativas números 3894, 3919 y 3963 respectivamente mismas que remitió para su estudio y dictamen a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Estas tres iniciativas pretenden la creación y modificación de distintos tipos penales que pudieran ser cometidos por funcionarios o empleados públicos. La iniciativa **3894** presentada por los representantes: Nineth Varenca Montenegro Cottom, Rodolfo Aníbal García Hernández, Otilia Lux de Cotí, José Alejandro Alburez, Leonel Barragán y Manuel García; la iniciativa **3919** presentada por los representantes: Jaime Martínez Lohaiza, Virna Ileana López Chacón y Jorge Mario Barrios Falla; y la iniciativa **3963** presentada por los representantes Rodolfo Aníbal García Hernández y Otilia Lux de Cotí.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

Iniciativa 3894

La iniciativa en análisis pretende la creación del tipo penal de Enriquecimiento Ilícito como una figura delictiva en la que solamente puede incurrir en ella cualquier persona durante el ejercicio de un cargo público o que se encuentre administrando, recaudando o manejando fondos públicos y como consecuencia de ello incrementar su patrimonio, el de su conviviente, hijos y demás parientes dentro de los grados de la ley o bien el de aquellas personas que se encuentren bajo su guarda o tutela así como aquellas personas jurídicas con las que se encuentre vinculado, de tal modo que este incremento sobrepase notoriamente sus legítimas y normales posibilidades económicas, esto sin que el sujeto activo pueda justificar su lícita procedencia.

Iniciativa 3919

La iniciativa en análisis pretende reformar el código penal (Decreto 17-73) del Congreso de la República, para crear el capítulo IV BIS referente a los delitos de Enriquecimiento Ilícito.

[Firmas manuscritas]

00000042



Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Congreso de la República
Guatemala, C. A.

en el que se contemplan la creación de los tipos penales siguientes: Enriquecimiento Ilícito; Falsedad en la Declaración Jurada; Recepción, Legalización o Encubrimiento de Bienes; Legislación o Administración en Provecho Propio; Sobreprecio Irregular; Pago Irregular de Contratos Administrativos y Tráfico de Influencias. De la misma manera, incorpora un artículo específico para fijar como pena accesoria la inhabilitación para el desempeño de empleo, cargo o comisiones públicas que ejerza, incluso los de elección popular, por un período de dos a diez años.

Iniciativa 3963

Esta iniciativa pretende la creación del tipo penal de Cobro Ilegal de Comisiones, que consiste en sancionar a todo aquel funcionario o empleado público, quien ejerza funciones públicas, o quien por cualquier motivo administre recursos públicos, que solicite, gestione o reciba directa o indirectamente comisión, retribución económica, pago, promesa o cualquier tipo de beneficio para que realice o adjudique, por sí o por tercera persona contrato u obra pública. De la misma forma pretende reformar a los tipos penales de Cohecho Pasivo, Cohecho Activo, Peculado Culposo, Malversación, Concusión. Esta iniciativa también pretende reformar el numeral e.1 del artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006 del Congreso de la República, con el fin de incorporar los delitos de cohecho pasivo, Cobro Ilegal de Comisiones, Peculado, Peculado Culposo, Malversación y Concusión, para que se apliquen las normas, agravantes especiales, medios, métodos especiales de investigación y persecución penal, las medidas precautorias, las penas accesorias, así como las reglas sobre colaboradores y medios de impugnación, contemplados en esta Ley

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo la realización del Bien Común, de esta manera la Corte de Constitucionalidad interpreta que: "...los legisladores están legitimados para dictar las medidas que dentro de su concepción ideológica y sin infringir preceptos constitucionales, tiendan a la consecución del Bien Común. Al respecto conviene tener presente que la fuerza debe perseguir objetivos generales y permanentes, nunca fines particulares...", en este mismo sentido el texto constitucional en el artículo 2 establece que: "...es deber del Estado garantizarle a todos los habitantes de la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona".

00000043



Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Congreso de la República
Guatemala, C. A.

El Estado de Guatemala ha ratificado la Convención Interamericana Contra la Corrupción a través del Decreto 15-2001 del Congreso de la República y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo, 2000) a través del Decreto 87-2003 del Congreso de la República, instrumentos que tienen la finalidad de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. Considerando que es propio de la democracia representativa, combatir por cualquier medio posible este tipo de actuaciones, los Estados que suscribieron esta Convención se comprometieron a la creación y utilización de los instrumentos legales necesarios para aplicar dentro de su ordenamiento jurídico los principios y disposiciones consagrados en dichos instrumentos internacionales, con el propósito de lograr una mayor transparencia en el funcionamiento de sus entidades y por ende generar una confianza en la administración pública del país.

Lo anteriormente expuesto evidencia la importancia del papel que los funcionarios o empleados públicos realizan para el efectivo funcionamiento del Estado, en este sentido el cuerpo constitucional establece en el artículo 154 que: *"Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella."*

Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno...". Estos principios constitucionales establecen que las acciones de los funcionarios o empleados públicos se rige por el principio de legalidad, en el sentido de que toda acción realizada por estos, debe estar previamente establecida en ley, contrario al principio libertad bajo el que se rige un ciudadano común y corriente, al que se le permite hacer todo lo que la ley no le prohíbe.

El principio de legalidad es fundamental para comprender el fenómeno de la corrupción, pues el mismo, se refiere a las acciones u omisiones de los funcionarios públicos tendientes a la violación del interés público, encaminadas a la obtención de privilegios, de ventajas especiales, a favor de los propios administradores, allegados, amigos o socios, desnaturalizando la función pública y el Estado en sí, incluyendo el Bien Común y el desarrollo integral de la persona. La doctrina define corrupción así: *"...una conducta que se desvía de las obligaciones del orden público normales debido a intereses personales (familiares o de allegados) o beneficios monetarios o de orden social; o que viola normas respecto al uso de cierto tipo de influencias con fines personales."*

Para garantizar el efectivo funcionamiento del Estado se deben de tener en cuenta la prevalencia de los intereses sociales sobre los particulares, en este sentido la Constitución Política de la República en el artículo 44 establece que: *"...El interés social prevalece sobre el interés particular..."*, esto sumado al principio de legalidad también contemplado en el

00000044



Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Congreso de la República
Guatemala, C. A.

texto constitucional establece en forma precisa que el actuar de los funcionarios y empleados públicos deben de actuar apegados a la ley en búsqueda del Bien Común.

CONSIDERACIONES DE LA COMISION

Las iniciativas en estudio tienen como objetivo una mejor tipificación de los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en contra de la Administración Pública, a través del fortalecimiento del sistema de sanciones pecuniarias e inhabilitación especial por los delitos cometidos en contra del patrimonio del Estado y la creación de nuevos tipos de delito.

La Corrupción es un fenómeno criminal complejo que constituye los cimientos para la ineficiencia e inoperancia del aparato estatal, debido a esto la estrategia para el combate a esta práctica endémica en cualquiera de sus formas debe de organizarse de forma sistémica e integral, de allí que la adaptación de los tipos penales para combatir este mal es solamente un paso inicial, pero necesario, para el combate a este flagelo. En este sentido esta Comisión de Trabajo estima pertinente que se incorporen nuevos tipos penales al ordenamiento jurídico penal vigente, tales como el Enriquecimiento Ilícito, Tráfico de Influencias y Cobro Ilegal de Comisiones, debido a que la respuesta del sistema de justicia a los actos de corrupción ha sido insuficiente para controlar estos actos criminales en todas sus manifestaciones, ya que según datos proporcionados por el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial del Organismo Judicial (CENADOJ) del año 2005 al 2007 se han emitido únicamente 94 sentencias condenatorias por los delitos de Cohecho Pasivo, Cohecho Activo, Peculado, Malversación, Concusión y Fraude, divididas de la forma siguiente:

Delito	Sentencias Condenatorias 2005-2007
Cohecho Pasivo	15
Cohecho Activo	33
Peculado	20
Malversación	25
Concusión	1
Fraude	0

A pesar del bajo porcentaje de sentencias condenatorias en estos delitos, la población guatemalteca manifiesta un elevado índice de percepción de corrupción en la administración pública, ya que según el índice de Percepción de la corrupción sitúa a Guatemala en la posición número 111 de 158 países evaluados, esto puede ser un referente importante para poder medir la magnitud de la cifra negra existente en relación a



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*

*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*


los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos y que CENADOJ únicamente reporta 2,386 casos ingresados para estos delitos del año 2005 al 2007, esto quiere decir que solamente en el 3.93% de los casos ingresados por estos delitos se llega a determinar la culpabilidad de los funcionarios o empleados públicos en la comisión de estos actos criminales, y en la mayoría de casos se refiere a hechos de corrupción de menor cuantía.

En este sentido, es sabido que en Guatemala la impunidad y la corrupción son fenómenos que se interrelacionan de forma constante, a tal grado que se han convertido en problemas estructurales que atraviesan a la sociedad, rebasando fronteras ideológicas, religiosas y económicas. Una de las principales muestras de este problema lo constituye la falta de efectividad del sistema de justicia para realizar la investigación criminal y persecución penal, aduciendo tener dificultades para realizar la investigación, de allí que esta Comisión de Trabajo considera conveniente que se adicionen a la Ley Contra la Delincuencia Organizada los delitos de Cohecho Pasivo, Cohecho Activo, Cobro Ilegal de Comisiones, Tráfico de Influencias, Peculado por Sustracción, Peculado de Uso, Enriquecimiento Ilícito; para que puedan aplicarse en estos delitos las normas, las agravantes especiales, los medios, los métodos especiales de investigación y persecución penal, las medidas precautorias, las penas accesorias, así como las reglas sobre colaboradores y medios de impugnación, contenidas en el Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República

DICTAMEN

En base a las consideraciones Constitucionales, Legales y Políticas vertidas anteriormente, esta Comisión emite **DICTAMEN FAVORABLE** a los proyectos de decreto contenidos en las Iniciativas 3894 ,3919 y 3963 por ser viable, oportuno, conveniente y Constitucional.

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de Guatemala, en la ciudad de Guatemala el día diecisiete de noviembre de dos mil ocho.


Oliverio García Rodas
Presidente


Roberto Ricardo Villate Villatoro
Vicepresidente



00000046

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales*
Congreso de la República
Guatemala, C. A.



José Alberto Gándara Torreblarte
Secretario



Rosa María Angel Madrid De Frade



Héctor Alfredo Nuila Ericastilla



Francisco José Contreras Contreras



Rodolfo Aníbal García Hernández



Cesar Augusto Del Águila López



José Roberto Alejos Cámara



Carlos Valentín Gramajo Maldonado



Maura Estrada Mansilla

Jorge Mario Barrios Falla



Gladis Anabella De León Ruiz

Carlos Enrique Bautista Godínez

Ronnie Danilo Escobar



00000047

DECRETO NÚMERO _____

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y su fin supremo es la realización del bien común; así mismo constituye deber esencial del Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona;

CONSIDERANDO:

Que las diversas formas de corrupción manifestadas en el accionar de los funcionarios y empleados públicos constituyen uno de los elementos fundamentales que impiden la materialización de estos principios constitucionales;

CONSIDERANDO:

Que el correcto funcionamiento de la función pública contribuye al desarrollo económico, social y cultural del Estado de Guatemala, así como a la credibilidad y legitimidad del mismo.

CONSIDERANDO:

Que para contribuir a la realización de los fines del Estado de Guatemala, se hace necesario adecuar nuestra legislación penal en materia de corrupción al contexto de falta de efectividad del Estado para perseguir dichos delitos;

POR LO TANTO:

Con base a las atribuciones que le asigna la literal "a" del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

Las siguientes modificaciones al Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República y a la Ley contra la Delincuencia Organizada Decreto 21-2006 del Congreso de la República.

Artículo 1. Se adiciona el numeral 6 al artículo 51 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

"6. A los condenados por los delitos dolosos contra la Administración Pública, sean funcionarios o empleados públicos, o particulares."

Artículo 2. Se adiciona el numeral 6 al artículo 108 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:



00000048

“6 °. Para todos los delitos contra la Administración Pública desde el día en que el funcionario o empleado público cesa en el desempeño de su cargo. Esta disposición se aplica a todos los participantes en el hecho punible sin excepción alguna”

Artículo 3. Se reforma el artículo 418 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 418. Abuso de Autoridad. Comete delito de Abuso de Autoridad, el funcionario o empleado público que abusando de su cargo o de su función, ordenare, cometiére o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares o funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta.

Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare de apremios ilegítimos o innecesarios”.

Artículo 4. Se reforma el artículo 419 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 419. Incumplimiento de deberes. Comete delito de Incumplimiento de Deberes, el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta.”

Artículo 5. Se adiciona el artículo 419 Bis. al Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 419 Bis. Falsedad en la declaración jurada patrimonial. Comete delito de Falsedad en la Declaración Jurada Patrimonial, el funcionario o empleado publico que durante el ejercicio de su cargo incurra en falsedad, simulación o encubrimiento al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de Cuentas. **El responsable de este delito será sancionado con multa de veinticinco mil (Q.25, 000.00) a doscientos mil (Q.200, 000.00) quetzales”**

Artículo 6. Se reforma el artículo 420 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 420. Desobediencia. Comete delito de Desobediencia, el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de cinco mil a veinte mil quetzales e inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta.”



00000049

Artículo 7. Se reforma el artículo 432 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículos 432. Nombramientos Ilegales. Comete delito de Nombramientos Ilegales, el funcionario o empleado público que a sabiendas, propusiere o nombrare para cargo o empleo público a persona en quien no concurren los requisitos que la ley exija. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de seis (6) meses a dos (2) años y multa de diez mil a veinticinco mil quetzales.

Igual sanción se impondrá a quien propusiere o nombrare a persona que reúna los requisitos legales para el cargo, pero omita o altere los procedimientos legales o reglamentariamente establecidos.

Si la persona nombrada o propuesta, es pariente dentro de los grados de ley del autor del delito, la pena se aumentará en una tercera parte y se impondrá inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta.”

Artículo 8. Se reforma el artículo 433 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 433. Usurpación de Atribuciones. Comete delito de Usurpación de atribuciones, el funcionario o empleado público que, a sabiendas, se arrogare facultades que no correspondieren a su cargo o atribuciones que no le competan. El responsable de este delito será sancionado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años y multa diez mil a veinticinco mil quetzales”.

Artículo 9. Se reforma el artículo 439 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo. 439. Cohecho Pasivo. Comete delito de Cohecho Pasivo, el funcionario o empleado público que solicite o acepte, directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio indebido, como favor, dádiva, presente, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, individual o jurídica, para realizar u ordenar un acto propio de su cargo, sin faltar a su obligación, o el que las solicite o acepte a consecuencia de haberlo hecho. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco (5) a diez (10) años, multa de cincuenta mil (Q 50,000.00) a quinientos mil (Q 500,000.00) quetzales, e inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido.

Si el valor pecuniario o el beneficio indebido, como favor, dádiva, presente, promesa o ventaja se solicita o acepta para realizar u ordenar, un acto en incumplimiento de sus obligaciones, o para omitir o retardar el cumplimiento de las mismas, o si solicita o acepta a consecuencia de haber faltado a sus deberes. La pena de prisión será de cinco (5) a diez (10) años, multa de cincuenta mil (Q 50,000.00) a quinientos mil (Q 500,000.00) quetzales, de inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido.

Cuando el funcionario o empleado público obligare al favor, dádiva presente, promesa o ventaja, la pena se aumentará en una tercera parte.



00000050

Artículo 10. Se reforma el artículo 442 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 442. Cohecho Activo. Comete delito de Cohecho Activo, cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario o empleado público, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, dádiva, presente, promesa o ventaja, para el o para otra persona, individual o jurídica, para que dicho funcionario realice, ordene, omita o retarde un acto en incumplimiento de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a sus deberes. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco (5) a diez (10) años, multa de cincuenta mil (Q 50,000.00) a quinientos mil (Q 500,000.00) quetzales.

Si el valor pecuniario o el beneficio indebido, como favor, dádiva, presente, promesa o ventaja que se ofrece o entrega, tiene por finalidad que el funcionario o empleado público realice u ordene un acto propio de su cargo sin faltar a su obligación, o se ofrece o entrega a consecuencia de haberlo hecho. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cuatro (4) a ocho (08) años y multa de cincuenta mil (Q 50,000.00) a quinientos mil (Q 500,000.00) quetzales.

Si queda demostrado en el proceso que una persona jurídica, participó en las actividades descritas en el primer párrafo, a través de las personas mencionadas en el artículo 38 del Código Penal, buscando beneficio para esa persona jurídica, además de las sanciones aplicables a los responsables del delito, se impondrá a la persona jurídica una multa de cien mil quetzales (Q 100,000.00) a setecientos cincuenta mil quetzales (Q 750,000.00).

Artículo 11. Se reforma el artículo 445 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 445. Peculado por Sustracción. Comete delito de Peculado por Sustracción, el funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero, efectos o bienes que custodie, perciba, administre o guarde por razón de sus funciones. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco (05) a diez (10) años, multa de diez mil a cincuenta mil quetzales e inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta.

Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes.”

Artículo 12. Se adiciona el artículo 445 Bis. al Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 445 Bis. Peculado por Uso. Comete delito de peculado por uso, el funcionario o empleado público que para fines distintos al servicio establecidos en la administración publica utilice o permita que otro utilice, en provecho propio o de terceros, vehículos, maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se halla bajo su guarda, custodia o administración, así como trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerce. El responsable de este delito será sancionado con prisión de tres (03) a cinco (5) años, multa de diez mil a cincuenta mil quetzales e inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta.



Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los bienes indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública.

Si los vehículos, maquinarias, y cualquier otro instrumento de trabajo, trabajos o servicios estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes."

Artículo 13. Se reforma el artículo 446 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

"Artículo 446. Peculado culposo. Comete delito de peculado culposo, el funcionario o empleado público que, por negligencia, diere ocasión a que se realizare por otra persona la sustracción de dinero, efectos o bienes de que se trata el artículo 445 y 445 bis, de la presente ley. El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno (1) a tres (3) años e inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta.

La misma pena se impondrá al funcionario o empleado público que a sabiendas permita que se pierdan, destruyan, descompongan o venzan bienes, alimentos o productos de naturaleza perecedera que se encuentren bajo su custodia o administración, aun cuando no pertenezcan al Estado.

Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes.

Artículo 14. Se reforma el artículo 447 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

"Artículo 447. Malversación. Comete delito de Malversación, el funcionario o empleado público que diere a los caudales, efectos o bienes que administren, una aplicación o uso público diferente de aquella a que estuviesen destinados. El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno (01) a tres (03) años y multa de veinte mil (Q. 20,000.00) a cincuenta mil (Q. 50,000.00) quetzales.

Si como consecuencia de la comisión de este delito se ocasione daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en una tercera parte.

Si los caudales, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena se aumentará en dos terceras partes."

Artículo 15. Se adiciona el artículo 448 Bis. al Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

Artículo 448 Bis. Enriquecimiento ilícito. Comete delito de Enriquecimiento Ilícito, el funcionario o empleado público que durante el ejercicio del cargo o función pública y hasta cinco años después de haber cesado en él, aumente su patrimonio o su gasto económico personal, el de su cónyuge, hijos, familiares o interpósita persona, de manera notoriamente superior y desproporcionado, al que normalmente haya podido obtener en virtud de sus sueldos, emolumentos, incrementos regulares de capital o por ingresos de cualquier otra causa lícita. Comete el mismo delito cuando el nivel de gastos, cancelación de deudas u obligaciones, no se corresponda con ingresos lícitos. El responsable de este delito será



00000052

sancionado con prisión de cinco (5) a diez (10) años, multa de cincuenta mil a quinientos mil quetzales y el comiso de los bienes, productos, beneficios, utilidades u objetos del delito, e inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta.”

Artículo 16. Se adiciona el artículo 448 Ter. al Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 448 Ter. Testaferrato. Comete el delito de testaferrato la persona individual o jurídica que preste su nombre o razón social, para colaborar en la comisión de cualquiera de los delitos cometidos en contra de la administración pública, contemplados en el título XIII este Código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de cinco (05) a diez (10) años y multa de cincuenta mil (Q.50, 000.00) a quinientos mil (Q.500, 000.00) quetzales”

Artículo 17. Se suprime el segundo párrafo del artículo 449 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas.

Artículo 18. Se adiciona el artículo 449 Bis. al Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 449 bis. Tráfico de influencias. La persona que por sí misma o por interpósita persona o actuando como intermediaria, influya o intente influir en un funcionario o empleado público prevaleándose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal para obtener un beneficio, resolución o dictamen en un asunto que esté conociendo, vaya a conocer o deba resolver. El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos (2) a seis (6) años.

La misma pena tendrá quien por sí mismo o por interpósita persona, invocando influencias, reales o supuestas, recibe, solicita, hace dar o prometer para sí o para otro, algún objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, dádiva, presente, promesa o ventaja, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o empleado público que esté conociendo, resolviendo o haya de conocer o resolver cualquier asunto judicial o administrativo, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero.

Si el autor es funcionario o empleado público que se aprovecha de su cargo o función para cometer este delito, la pena se aumentará en dos terceras partes.

Si el delito se cometiera sobre un funcionario judicial se impondrá el doble de la pena.

Artículo 19. Se reforma el artículo 450 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 450. Fraude. Comete delito de Fraude, en la administración pública el funcionario o empleado público que por razón de su cargo o comisión especial interviene en alguna licitación, adquisición, compra, concesión, subasta, liquidación de efectos de haberes públicos, o cualquier operación semejante, se concertare con los interesados, solicitantes o promotores de dichas operaciones, o usare de cualquier otro artificio para defraudar al Estado. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco (5) a diez (10) años e inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta.



00000053

Si la operación en la que interviene el funcionario o empleado público estuviese relacionada o destinada a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes.”

Artículo 20. Se adiciona el artículo 450 Bis al Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 450 Bis. Cobro ilegal de Comisiones. Comete delito de cobro ilegal de comisiones, el funcionario o empleado público que solicite, gestione o reciba, directa o indirectamente comisión, retribución económica, pago, promesa o cualquier tipo de beneficio para que se realice o adjudique por sí o por tercera persona contrato u obra pública. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco (5) a diez (10) años, multa de cincuenta mil (Q 50,000.00) a quinientos mil (Q 500,000.00) quetzales e inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta.”

Artículo 21. Se reforma el artículo 451 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 451. Exacciones ilegales. Comete delito de exacciones ilegales, el funcionario o empleado público que a sabiendas exigiere impuesto, contribución, tasa, o arbitrios ilegales o mayores de los que correspondan. El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de cinco mil a veinticinco mil quetzales, e inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por tiempo que dure la pena de prisión impuesta.

Si el funcionario o empleado público convirtiere en provecho propio o de tercero el producto de las exacciones expresadas en el párrafo anterior, la pena se aumentará en una tercera parte.”

Artículo 22. Se reforma el artículo 452 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 452. Cobro indebido. Comete delito de Cobro Indebido, el funcionario o empleado público que autorice recibos o comprobantes ficticios, alterados o injustificados, o quien los cobre. El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de cinco mil a veinticinco mil quetzales, e inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.”

Igual delito comete el funcionario o empleado público que autorice recibos o comprobantes ficticios, alterados o injustificados en espectáculos públicos.

Artículo 23. Se reforma el artículo 469 del Código Penal Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 469. Denegación de Justicia. Comete delito de denegación de justicia, el juez, el representante del Ministerio Público o el funcionario, autoridad o agente que, faltando a la obligación de su cargo, dejare maliciosamente de promover la persecución y procesamiento de los imputados penalmente. El responsable de este delito será sancionado con prisión de



00000054

dos (2) a cinco (5) años, multa de dos mil a diez mil quetzales, e inhabilitación especial conforme al artículo 56, numerales 2 y 3 por el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.

Artículo 24. Se reforma la literal e.1 del artículo 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto número 21-2006 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así:

“e.1. Cohecho pasivo, cohecho activo, cohecho activo transnacional, peculado por sustracción, peculado por uso, malversación, enriquecimiento ilícito, concusión, tráfico de influencias, fraude, cobro ilegal de comisiones, colusión y prevaricato.”

Artículo 25. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial.

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA ____ DEL MES ____ DE DOS MIL ____.